

**RESOLUCION SO-No. 471-2021**

**EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No. 337-2019-SN**

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

**VISTO:** Para resolver los escritos de “MANIFESTACIÓN, SOLICITA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES” y, “SE PRESENTA MANIFESTACION.- SE INTERPONE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL EXPEDIENTE DE MERITO AL DIA HABIL VIERNES 13 DE MARZO DE 2020. TRAMITE.- RESOLUCION” presentados por el Abogado **ROLANDO ARTURO RAUDALES**, quien actúa en su condición de Oficial de Transparencia del **CONGRESO NACIONAL**”, según expediente administrativo con registro número **337-2019-R**.

**ANTECEDENTES:**

1). En fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), el señor **JAVIER SAN VICENTE MAEZTU**, presentó solicitud de información, con registro No. **SOL-CN-379-2019**, por medio de la **PLATAFORMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICO DE HONDURAS (SIELHO)**, ante el **CONGRESO NACIONAL**, para que le fuera entregada la información referente a: “1) Listado con los nombres de los diputados del Partido Liberal que el pasado 16 de octubre de 2019 votaron a favor de la aprobación de los decretos 117-2019 y 116-2019; Específicamente solicito que se indique el nombre de cada diputado suplente que participó en la votación, así como del diputado titular en sustitución del cual ejercieron el voto dichos suplentes. Muchas Gracias; 2) Me envíen el listado con los nombres de los Diputados del Partido Liberal que el pasado 16 de octubre de 2019 votaron a favor de la aprobación de los decretos 117-2019 que el pasado 16 de octubre de 2019 votaron a favor de la aprobación de los decretos 117-2019 y 116-2019. Específicamente solicito que se indique el nombre de cada Diputado suplente que participo en la votación, así como del diputado titular en sustitución del cual ejercieron el voto dichos suplentes.”



2). En fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), el señor **JAVIER SAN VICENTE MAEZTU**, presentó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a través del **SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICO DE HONDURAS (SIELHO) RECURSO DE REVISIÓN** con número **REC-CN-21-2019**, contra el **CONGRESO NACIONAL**, aduciendo que no se le proporcionó la información solicitada en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

3). En providencia de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), la Secretaría General del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), admitió el **RECURSO DE REVISIÓN** presentado y, ordenó requerir al señor **JOSE TOMAS ZAMBRANO MOLINA**, en su condición de **PRIMER SECRETARIO** del **CONGRESO NACIONAL**, para que en un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el respectivo requerimiento, por medio de su Oficial de Información Pública o la persona que haga sus veces, remitan al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los antecedentes relacionados con el Recurso de Revisión promovido por la recurrente, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere, se le impondrán las sanciones establecidas en el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; requerimiento practicado a la institución obligada en fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

4). En providencia de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), la Secretaría General del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), tiene por recibido el **Oficio No. 188-2018PS/CN**, recepcionado en la misma fecha, presentado por el señor **JOSE TOMAS ZAMBRANO MOLINA**, en su condición de **PRIMER SECRETARIO** del **CONGRESO NACIONAL**, en consecuencia, se ordenó hacer entrega de la información remitida al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al señor **JAVIER SAN VICENTE MAEZTU**.

5). Consta en el presente expediente el correo electrónico [jasavic2000@gmail.com](mailto:jasavic2000@gmail.com) de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), mediante el cual el Abogado **WILLIAM ERNESTO HERNADEZ**, en su condición de Asistente de la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), comunica al señor **JAVIER SAN VICENTE MAEZTU**, que la información recibida en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), remitida por la Institución obligada, ya se

encuentra a su disposición para su retiro y se manifieste sobre la conformidad o no de la misma.

6). En fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), el Abogado **WILLIAM ERNESTO HERNADEZ**, rindió informe en el que manifiesta que se le envió al correo electrónico del recurrente, comunicación para que se presente al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a retirar la información remitida por parte de la Institución obligada y se manifieste sobre su conformidad; el recurrente a la fecha no se ha hecho presente a este Instituto a retirar la Información remitida.

7). Mediante providencia de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), la Secretaría General de este Instituto de Acceso a la Información Pública, mando se procediera a remitir las presentes diligencias a la **Unidad de Servicios Legales**, para que emitan el dictamen que corresponde; emitiendo dicha Unidad **Dictamen Legal No. USL-054-2020**, de fecha diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020) en él que dictaminó: declarar: **CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN** interpuesto por el señor **JAVIER SAN VICENTE MAEZTU**, en contra del **CONGRESO NACIONAL**, en virtud de que la Institución Obligada no dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información dentro del plazo legalmente establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 52 numeral 1 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

8). Mediante providencia de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), el Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, emitió auto en el que ordeno al Congreso Nacional, que diera las razones del porque no hizo entrega de la información consistente en **“1) Listado con los nombres de los diputados del Partido Liberal que el pasado 16 de octubre de 2019 votaron a favor de la aprobación de los decretos 117-2019 y 116-2019; Específicamente solicito que se indique el nombre de cada diputado suplente que participó en la votación, así como del diputado titular en sustitución del cual ejercieron el voto dichos suplentes. Muchas Gracias; 2) Me envíen el listado con los nombres de los Diputados del Partido Liberal que el pasado 16 de octubre de 2019 votaron a favor de la aprobación de los decretos 117-2019 que el pasado 16 de octubre de 2019 votaron a favor de la aprobación de los decretos 117-2019 y 116-2019. Específicamente solicito que se indique el nombre de cada Diputado suplente que participo en la votación, así como del diputado titular en sustitución del cual ejercieron el voto dichos suplentes.”**; actuación notificada en legal y debida forma



a la institución obligada en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veinte (2020). Ver folios desde el 32 hasta el 37 del expediente 337-2019-R aquí atendido.

9). Consta en folios desde el 40 hasta el 43, la presentación de escrito de SUSPENSION DE TERMINOS Y NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES presentada por el Abogado ROLANDO ARTURO RAUDALES, en su condición de Oficial de Información Pública del Congreso Nacional, en tal sentido, en fecha cuatro (4) de enero del año dos mil veintiuno (2021), se emitió auto en el que se determinó que previo a resolver la nulidad planteada, se libre atento oficio a la Dirección de Recursos Humanos del Congreso Nacional, si la Unidad de Transparencia del CONGRESO NACIONAL labora de forma presencia o virtual; de igual forma, solicito a la Gerencia de Infotecnología del Instituto de Acceso a la Información Pública con el fin de que emitieran dictamen técnico indicando si el correo institucional del Congreso Nacional no ha sido habilitado desde el trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020).

10). En fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Infotecnología del Instituto de Acceso a la Información Pública determinó que era imposible el conocer si el correo electrónico del CONGRESO NACIONAL estaba fuera de servicio o no, sino simplemente estableció que solo el usuario podía indicar tal extremo, que solamente era necesario tener una conexión de internet, conocer su nombre de usuario y contraseña de acceso para determinar si dicho correo se encontraba o no habilitado.

11). Consta en folios cuarenta y siete (47) y cuarenta y ocho (48) del expediente aquí atendido, respuesta recibida en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), remitida por el Gerente de Recursos Humanos del CONGRESO NACIONAL en el que indica que la Oficina de Transparencia del CONGRESO NACIONAL se encontró cerrada desde el 13 de marzo del año dos mil veinte (2020) a la fecha; que el CONGRESO NACIONAL ha estado funcionando con el mínimo de personal, con el objetivo de cumplir con las necesidades básicas y fundamentales para cumplir con las sesiones legislativas; y, en lo relacionado al correo institucional, pues comentan que no existen elementos técnicos que puedan demostrar que el correo institucional de la Oficina de Transparencia del Congreso Nacional haya sido usado.

12). En fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), el Abogado ROLANDO ARTURO RAUDALES, actuando en su condición de Oficial de Transparencia del Congreso Nacional de la República, presento escrito denominado "SE

PRESENTA MANIFESTACION.- SE INTERPONE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL EXPEDIENTE DE MERITO AL DIA HABIL VIERNES 13 DE MARZO DE 2020. TRAMITE.- RESOLUCION". En el que dispuso, de forma sucinta y más preponderante, lo siguiente: PRIMERO: Que para hacerle frente a los riesgos de contagios a consecuencia del COVID19, la institucionalidad suspendió garantía y derechos fundamentales, de acuerdo a lo establecido en el Pacto de San José y en la Constitución de la Republica, a partir del 15 de marzo del año 2020, resultando como último día hábil el 13 de marzo del mismo año, desplegando confinamiento a partir del 16 de marzo del año 2020 para toda la ciudadanía. SEGUNDO: Que el Decreto Ejecutivo contentivo en el PCM-021-2020 de fecha 15 de marzo del año 2020, suspendió las garantías instituidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 99 y 103 de la Constitución de la Republica, además invoca que la suspensión de labores, tanto en el sector público y privado, así como la libre circulación que fueron dispuestas en el PCM-021-2020. TERCERO: Que el CONGRESO NACIONAL suspendió sus labores y actividades a partir del 13 de marzo del año 2020. CUARTO: Que, en fecha 22 de diciembre del año 2020, presento escrito en el que estableció que el CONGRESO NACIONAL suspendió labores de forma absoluta, todo en apego a las disposiciones emitidas por el SINAGER emitidas mediante PCM-021-2020 y, que el Pleno de Diputados del Congreso Nacional, mediante Resolución No. 01-2020 de fecha 02 de abril del año 2020, publicado el Diario Oficial la Gaceta el 03 de abril del año 2020, se ordenó cumplir las labores de forma semi-presencial, con el personal estrictamente necesario e indispensable para el cumplimiento de su función legislativa. QUINTO: La resolución No. 01-2020 de fecha 02 de abril del año 2020, excluyo a la Oficina de Transparencia o de Acceso a la Información Pública, debido a que esa oficina podría provocar un riesgo de contagio del COVID19, por el contacto que esa oficina tiene con el público en general y además, porque el personal que labora en dicha oficina padece de enfermedades de base, todo en cumplimiento o salvaguarda de lo que indica el artículo 59 de la Constitución de la Republica "La persona Humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla". SEXTO: Que hasta en fecha nueve (9) de abril del año 2021, el personal que realiza actividades en la Oficina de Transparencia del Congreso Nacional se presentaron a laborar de forma gradual por solicitud de la Gerencia de Recursos Humanos del Congreso Nacional.

13). En fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), el Instituto de Acceso a la Información Pública, tuvo por recibido el escrito presentado por el Oficial de Transparencia del CONGRESO NACIONAL, y ordeno darle traslado a la Unidad de



Servicios Legales del Instituto de Acceso a la Información Pública con el fin de que emitieran el dictamen que en ley corresponde.

**14).** Consta en el expediente aquí atendido, nota de fecha 27 de julio del año dos mil veintiuno (2021) enviada por la Oficina de Transparencia del CONGRESO NACIONAL, en el que informan el haber dado respuesta al Requerimiento 337-2020-R, generando la siguiente información: Nota de fecha 21 de julio del año 2021, emitido por el gerente de Tecnología del Congreso Nacional; a consecuencia del escrito presentado y establecido en el presente numeral, en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) se tuvo por recibido el escrito presentado por el Congreso Nacional, se ordeno que se agregaran a sus antecedentes y, se estableció enviar el expediente de merito a la Unidad de Servicios Legales del Instituto de Acceso a la Información Pública con el fin de que emitieran el dictamen que en ley corresponde.

**15).** En fecha dieciocho (18) de agosto julio del año dos mil veintiuno (2021), la Unidad de Servicios Legales del Instituto de Acceso a la Información Pública, emitió dictamen con numero USL-406-2021, en el que dictamino, en su parte más preponderante: “la procedencia de declarar la nulidad absoluta de actuaciones presentada por el abogado ROLANDO ARTURO RAUDALES, en su condición de Oficial de Información Pública del Congreso Nacional.

**16).** El veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Instituto de Acceso a la Información Pública, ordeno, que previo a la continuación del trámite legal correspondiente, se hiciera entrega de la información a favor del ciudadano JAVIER SAN VICENTE MAEZTU, a fin de que se manifestara si se encuentra o no conforme con la información remitida por el CONGRESO NACIONAL.

**17).** Consta en folios ochenta y ocho (88) y ochenta y nueve (89), correo electrónico con la información adjunta remitida por el CONGRESO NACIONAL, información relacionada a causa del recurso de revisión presentado por el Señor JAVIER SAN VICENTE MAEZTU.

**18).** En folio noventa (90) del expediente aquí atendido, consta Informe de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), emitido por el Abogado LENIN JOSSEPH HERNANDEZ, Asistente de la Unidad de Servicios Legales del Instituto de Acceso a la Información Pública, en el que hace constar que al Señor JAVIER SAN

VICENTE MAEZTU, se le remitió la respuesta al recurso de revisión interpuesto en el Instituto de Acceso a la Información Pública, respuesta brindada por el CONGRESO NACIONAL, en tal sentido al envío de la información, la parte recurrente Señor JAVIER SAN VICENTE MAEZTU no se había manifestado el encontrarse inconforme o conforme con la información remitida.

### FUNDAMENTOS LEGALES:

- 1) Que el Sistema Interamericano fue el primero de los sistemas regionales en reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental que comprende una obligación positiva que recae sobre el Estado, de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder, conjuntamente con un derecho correlativo de las personas a acceder a la información en poder del Estado para generar en su conjunto la correcta aplicabilidad de todas las formas de transparencia y que la misma sea **garantizada por un órgano que esté dotado de principios de independencia y objetividad en cuanto a la aplicación y garantía de estos derechos.**
- 2) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que *“el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.”* **El Acceso a la Información y la transparencia es una herramienta clave para la participación ciudadana** en un sistema democrático, así como también indispensable para obtener una correcta aplicación de los principios de transparencia.
- 3) El derecho de acceso a la información pública tiene sus bases en la Constitución de la República, que enuncia en sus artículos 72, 74, 75, 76 y, 80, el derecho a la libertad de pensamiento, difusión y petición que posee todo ciudadano hondureño; y si bien es cierto en dichos artículos no se menciona de manera literal el acceso a la información pública como una garantía constitucional y derecho humano, si señala en sus artículos 15 y 16 del capítulo III, que los tratados firmados por Honduras con otros países y organismos internacionales forman parte del derecho interno, así como la obligación de ejecutar las sentencias judiciales de carácter internacional provenientes de dichos tratados, y ya que Honduras es parte de esas convenciones y tratados, implícitamente también reconoce y admite el derecho humano de acceso a la información pública.



- 4) Que el artículo 82 de la **CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA**, establece literalmente lo siguiente: *“El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”*
- 5) Que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), de acuerdo con el Artículo 38 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, es el órgano responsable de cumplir con las obligaciones que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción imponen al Estado de Honduras específicamente en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que velar por el cumplimiento de dicha normativa es una responsabilidad legal.
- 6) Que el Código Procesal Civil vigente, como norma supletoria a la Ley de Procedimientos Administrativo, dispone en su Artículo 3 define el **DEBIDO PROCESO**: Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.
- 7) Que el artículo 137 de la **LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO** establece literalmente lo siguiente: *“Contra la resolución que se dicte en los asuntos de que la Administración conozca en única o en segunda instancia, procederá el Recurso de Reposición ante el órgano que lo hubiere dictado. La reposición podrá pedirse dentro de los diez días siguientes al de la notificación del acto impugnado”.*
- 8) Que el artículo 150 de la **LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO** establece literalmente lo siguiente: *“Para la resolución de cuestiones no previstas expresamente en esta Ley, serán de aplicación supletoria los principios generales del procedimiento administrativo y, en su defecto, las normas del Código de Procedimientos Civiles, siempre que no fueren incompatibles con el régimen establecido por la misma.”*
- 9) Que del estudio de las normas legales queda evidenciado que **la transparencia y la publicidad**, son principios de cumplimiento absoluto e ineludible, siendo el Derecho de acceso a la información pública, un derecho fundamental para todos los ciudadanos que



deseen buscar y recibir información y datos en poder del Estado; incorporando al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad, credibilidad e inclusión social a las políticas públicas; de ahí que el derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido jurídicamente como un derecho fundamental e instrumental a nivel internacional y regional; asimismo, este derecho ha servido como un instrumento efectivo para promover la participación ciudadana contribuyendo, de esta forma, a la gobernabilidad democrática.

- 10) Que uno a uno de los hechos y fundamentos legales invocados en el escrito de “SE PRESENTA MANIFESTACION.- SE INTERPONE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL EXPEDIENTE DE MERITO AL DIA HABIL VIERNES 13 DE MARZO DE 2020. TRAMITE.- RESOLUCION” se desarrolla el análisis siguiente: **SOBRE EL HECHO PRIMERO**: Que para hacerle frente a los riesgos de contagios a consecuencia del COVID19, la institucionalidad suspendió garantías y derechos fundamentales, de acuerdo a lo establecido en el Pacto de San José y en la Constitución de la Republica, a partir del 15 de marzo del año 2020, resultando como último día hábil el 13 de marzo del mismo año, desplegando confinamiento a partir del 16 de marzo del año 2020 para toda la ciudadanía. **SE DESVANECE EL HECHO PRIMERO POR LAS SIGUIENTES RAZONES:** a). Este hecho no se encuentra en discusión en lo que concierne al Estado de Emergencia, producto de la atención a las solicitudes de información pública, lo que está en discusión, es si la solicitante o institución obligada se encuentra comprendida en tal circunstancia, ya que no está probado en autos, que el incumplimiento obedezca a razones de este tipo, si bien en abstracto, la Pandemia reúne las características de exterioridad, imprevisibilidad e irreversibilidad, esto no significa, que al llevarlo a la práctica, se encuentre amparado en caso fortuito o fuerza mayor, tomando en consideración que existe el Decreto Ejecutivo N° 031-2020, que determina que las instituciones obligadas se encuentran habilitadas para realizar sus actividades a través del teletrabajo, ya sea de forma total o parcial, y siendo que el derecho de Acceso a la Información Pública no tiene restricciones, se debió dar trámite a las solicitudes de Información en su totalidad en el **SISTEMA DE INFORMACION ELECTRONICA DE HONDURAS (SIELHO)**; el Abogado RAUDALES GODOY en ningún momento acreditó, mediante medio de prueba legal, que el CONGRESO NACIONAL no estaba cumpliendo con el teletrabajo, tampoco logro probar la parte solicitante, que por causas ajenas a su voluntad, no haya cumplido con tal obligación como lo manda la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al no ser válidas las



justificaciones que arguye, un supuesto valedero, hubiese sido que todo el personal de la comuna o del CONGRESO NACIONAL se hubiere contagiado del COVID-19, situación que no aconteció porque no fue probado por el Abogado RAUDALES GODOY; **b)**. Del análisis del escrito aquí atendido, se analiza y determina, que ante la violación de un **Derecho Humano** o violaciones a derechos fundamentales como el de la vida, salud, habeas corpus, *acceso a la información pública entre otros*, no fueron suspendidos, ni por el poder ejecutivo ni por el poder legislativo, en tal sentido, cualquier violación a un derecho fundamental, invocando como justificación la fuerza mayor y/o caso fortuito a consecuencia de la emergencia del covid-19, es algo que es contrario a la normativa nacional e internacional, es como si se cometiera un delito y este expirara, podría traer con ello grandes consecuencias tanto a la institucionalidad como lo es el Instituto de Acceso a la Información Pública, como al país, por la violación de tratados y convenios internacionales en la que el Estado de Honduras es tratante y/o firmante, es imposible que se alegue fuerza mayor y caso fortuito por el no cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por la violación del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública; **c)**. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha diez (10) de abril de dos mil veinte (2020) emitió la Resolución No. 1/2020 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS en el apartado de **Estados de excepción, restricciones a las libertades fundamentales y Estado de Derecho** en el numeral 33 establece que se debe de asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formato de datos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre el impacto de la pandemia y los gastos realizados en el marco de la emergencia, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. **En los casos de postergación de los plazos de solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberán fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y admitir la apelación de estas resoluciones**; situación que tomo el Instituto en considerar aplicar, ya que había transcurrido suficiente tiempo en el que las solicitudes de información no eran atendidas por varias instituciones obligadas, cuando en el marco y para la atención de la emergencia si eran atendidas. **SOBRE EL HECHO SEGUNDO:** Que el Decreto Ejecutivo contentivo en el PCM-021-2020 de fecha 15 de marzo del año 2020, suspendió las garantías instituidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 99 y 103 de la Constitución de la

Republica, además invoca que la suspensión de labores, tanto en el sector público y privado, así como la libre circulación que fueron dispuestas en el PCM-021-2020. **SE DESVANECE EL HECHO SEGUNDO POR LAS SIGUIENTES RAZONES:** Como sustento legal ya anteriormente establecido en el presente documento, el derecho de acceso a la información pública tiene sus bases en la Constitución de la República, que enuncia en sus artículos 72, 74, 75, 76 y, 80, el derecho a la libertad de pensamiento, difusión y petición que posee todo ciudadano hondureño; relacionado con los artículos constitucionales números 15 y, 16 del capítulo III, que los tratados firmados por Honduras con otros países y organismos internacionales forman parte del derecho interno, así como la obligación de ejecutar las sentencias judiciales de carácter internacional provenientes de dichos tratados, y ya que Honduras es parte de esas convenciones y tratados, implícitamente también reconoce y admite el derecho humano de acceso a la información pública; en tal sentido, del análisis al hecho segundo, se puede evidenciar que ni el Poder Legislativo y Ejecutivo suspendieron las garantías constitucionales que dan base al derecho fundamental del derecho de acceso a la información, es así, que no es procedente lo invocado por la parte solicitante. **SOBRE EL HECHO TERCERO:** Que el CONGRESO NACIONAL suspendió sus labores y actividades a partir del 13 de marzo del año 2020. **SE DESVANECE EL HECHO TERCERO** por las siguientes razones: Que nuevamente se establece que las garantías constitucionales que dan base legal de origen al cumplimiento del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública no se encuentran contentivas en ningún decreto emitido, ya sea, por el Congreso Nacional o por el Poder Ejecutivo, si la Jefatura de Recursos Humanos del Congreso Nacional dispuso situación diferente a no presentarse a laborar o el de no realizar teletrabajo fue decisión meramente propia, ya que la misma ley aprobada por el Poder Ejecutivo y que posteriormente también fue aprobada por el Poder Legislativo coloca la figura del Teletrabajo, situación que hasta el mismo Oficial de Información Pública reconoce con mencionar que las sesiones del Congreso Nacional se están desarrollando bajo esa figura, en tal sentido, no es procedente lo alegado por la parte reclamante. **SOBRE EL HECHO CUARTO:** Que, en fecha 22 de diciembre del año 2020, presento escrito en el que estableció que el CONGRESO NACIONAL suspendió labores de forma absoluta, todo en apego a las disposiciones emitidas por el SINAGER emitidas mediante PCM-021-2020 y, que el Pleno de Diputados del Congreso Nacional, mediante Resolución No. 01-2020 de fecha 02 de abril del año 2020, publicado el Diario Oficial la Gaceta el 03 de abril del año 2020, se ordenó cumplir las labores de forma semi-presencial, con el personal estrictamente necesario e indispensable para el cumplimiento de su función legislativa. **SE DESVANECE EL HECHO CUARTO POR LAS SIGUIENTES RAZONES:** Que



aquí solamente sirve para fortalecer el análisis empleado para desvanecer los hechos alegados por la parte interviniente, ya que se analiza que las labores pudieron haberse realizado de manera semi-presencial y aunado a eso utilizando la vía del teletrabajo tal como fueron desarrollados por las instituciones que conforman el poder ejecutivo y el poder judicial. **SOBRE EL HECHO QUINTO:** La resolución No. 01-2020 de fecha 02 de abril del año 2020, excluyó a la Oficina de Transparencia o de Acceso a la Información Pública, debido a que esa oficina podría provocar un riesgo de contagio del COVID19, por el contacto que esa oficina tiene con el público en general y además, porque el personal que labora en dicha oficina padece de enfermedades de base, todo en cumplimiento o salvaguarda de lo que indica el artículo 59 de la Constitución de la República “La persona Humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. **SE DESVANECE POR LAS SIGUIENTES RAZONES:** Del análisis sobre los hechos invocados se determina lo siguiente. a). Se reconoce la semi-presencialidad a laborar, situación está que no fue dispuesto para el cumplimiento de un derecho fundamental; b) No se utilizó la modalidad de teletrabajo, cuando instituciones de otros poderes del Estado como el poder ejecutivo, el poder judicial y hasta gobiernos municipales si desarrollaron, todo en virtud de que colocaron la transparencia y el acceso a la información pública como algo preponderante, tal como lo es, un derecho fundamental determinada además como **una herramienta clave para la participación ciudadana** en un sistema democrático, así como también indispensable para obtener una correcta aplicación de los principios de transparencia. c) Que este Instituto de Acceso a la Información Pública nunca podría violentar, irrespetar y no proteger lo indicado en el artículo 59 de la Constitución de la República “La persona Humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado” mucho menos poner en riesgo al personal que laboran en la oficina de transparencia y que padecen de enfermedades de base, sin embargo, este Instituto de Acceso a la Información Pública lo único que ha venido realizando en el transcurso de toda la emergencia, todo en cumplimiento de la ley y de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras, es, ha y, será el de salvaguarda el Derecho Fundamental de Acceder a Información, nuevamente se indica que la misma figura del teletrabajo, para no poner en peligro la vida y salud de la ciudadanía, fue aprobada por el Congreso Nacional y, por ende, eso se ha venido aplicando y cumpliendo por otros poderes del Estado, ya que los Derechos Fundamentales no pueden ser restringidos por muchos tiempo, tal como lo indica la resolución 001/2020 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos humanos, en tal sentido, lo alegado por la parte solicitante no es procedente por haber existido opción (teletrabajo, trabajo semi-presencial) que pudieron haber utilizado para el cumplimiento de un Derecho Humano.

**SOBRE EL HECHO SEXTO:** Que hasta en fecha nueve (9) de abril del año 2021, el personal que realiza actividades en la Oficina de Transparencia del Congreso Nacional se presentaron a laborar de forma gradual por solicitud de la Gerencia de Recursos Humanos del Congreso Nacional. **SE DESVANECE POR LAS SIGUIENTES RAZONES**, que no le es inherente a la ciudadanía las decisiones en cuanto a la suspensión de labores de todo el personal que labora en el Congreso Nacional, es más la interposición de algún reclamo, denuncia o recurso tiene que ser visto y analizado por las instituciones encargadas de resolver, en tal sentido, si la decisión de parte de la jefatura o gerencia de personal de no atender ninguna solicitud de información pública, vulnerando un derecho fundamental, pues lo que se analiza es que fueron erróneas, situación que como ya se indicó anteriormente en el presente acápite, causan hasta un estado de indefensión, el de no poder peticionar, que de igual manera son garantías constitucionales que no fueron suspendidas, por todo lo anterior, la nulidad invocada debe declararse sin lugar.

11) El Abogado **ROLANDO ARTURO RAUDALES GODOY**, no presento evidencia documental sobre el mal estado del correo electrónico institucional, sino, que simplemente detalla que no fue utilizado, es decir, no probó mediante medio de prueba legal que, del sistema del correo electrónico, se completó la entrega de los documentos y actuaciones enviadas y utilizadas para y por dicho correo electrónico; a consecuencia de ello, nos encontramos en una situación que no le es inherente al Instituto de Acceso a la Información Pública, sino, a la institución obligada, situación que es contraria a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionado con el artículo 4 numeral 11 y, artículo 7 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, se concluye que las actuaciones encontradas en el recurso de revisión registrado con el número de expediente 337-2019-R no se observa el encontrarse a lo establecido en el artículo 34 literal b) de la Ley de Procedimientos Administrativos, del análisis que se realiza a lo que obra en folios del expediente aquí atendido, no existe, algún acto de invalidez realizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública que se encuentre dentro de lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Procedimientos Administrativos. De lo que, si se puede evidenciar, es que el acto administrativo, solicitado sea anulado, se realizó de conformidad al procedimiento administrativo legal y prescrito en los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y, 27 de la Ley de Procedimientos Administrativo; y, no consta en el expediente, algún acto administrativo realizado con el procedimiento determinado en los artículos 83, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y, 128 de la Ley de Procedimientos Administrativos.



**POR TANTO:**

El **PLENO DE COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP)**, en el uso de sus facultades y con fundamento en los Artículos: 1, 3, 4, 11 numerales 9), 10) y, 11), artículos 13 y, 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 12 numeral 7 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Resolución No. 1/2020 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS en el apartado de **Estados de excepción, restricciones a las libertades fundamentales y Estado de Derecho** de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción; artículo 7 del Código Procesal Civil; artículos 39, 83, 131, 137, 138, y, 150 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Decreto Ejecutivo número PCM-021-2020; Decreto Ejecutivo número 031-2020. **POR UNANIMIDAD DE VOTOS;**

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Declarar **SIN LUGAR** los escritos de “**SE PRESENTA MANIFESTACION.- SE INTERPONE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL EXPEDIENTE DE MERITO AL DIA HABIL VIERNES 13 DE MARZO DE 2020. TRAMITE.- RESOLUCION**” presentados por el Abogado ROLANDO ARTURO RAUDALES, quien actúa en su condición de Oficial de Transparencia del **CONGRESO NACIONAL**, según expediente administrativo con registro número **337-2019-R**, por no existir elementos legales, ni evidencia suficiente documental para declarar ha lugar a las solicitudes de nulidad de actuaciones interpuesta.

**Y MANDA:**

**PRIMERO:** Que la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública, proceda a notificar a la profesional del Derecho **ROLANDO ARTURO RAUDALES GODOY**, en su condición de Oficial de Transparencia del **CONGRESO NACIONAL**, indicando en dicha notificación que con la emisión de la presente resolución puede interponer el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día siguiente de haber sido notificada esta resolución, de conformidad a lo que determinan los artículos 129, 130, 131, 138 y, 139 de la Ley de Procedimientos Administrativo. **SEGUNDO:** Que la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública, disponga a darle tramite a este expediente de conformidad a lo que

dispone los artículos 39 y, 64 de la Ley de Procedimientos Administrativo. **TERCERO:** Se aclara que se emite la presente resolución hasta la fecha por la alta carga de trabajo que se tiene en el Instituto de Acceso a la Información Pública y por las diferentes actuaciones presentadas y realizadas en el expediente de mérito. Y, para los fines legales correspondientes. **NOTIFÍQUESE.**

  
  
**HERMES OMAR MONGADA**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**

  
  
**IVONNE LIZETH ARDON ANDINO**  
**COMISIONADA SECRETARIA DE PLENO**

  
  
**JULIO VLADIMIR MENDOZA VARG**  
**COMISIONADO SECRETARIO DE PLENO**

  
  
**YAMILETH ABELINA TORRES HENRIQUEZ**  
**SECRETARIA GENERAL**

